



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 38

NOVIEMBRE 2009

La voluntad ciudadana: ni pacto ni reelección

Un año después de las cuestionadas elecciones municipales, las organizaciones de sociedad civil convocaron a una marcha para rechazar el fraude electoral y las pretensiones del presidente Ortega de reelegirse. Desde que fue anunciada, la marcha comenzó a ser amenazada y hostilizada por las fuerzas afines al gobierno, de tal manera que se temían enfrentamientos violentos el día 21 de noviembre, fecha de su realización.

Algunos acontecimientos previos favorecieron una asistencia masiva a la marcha y las expresiones de violencia política se presentaron solamente como hechos aislados. Valorada positivamente por diferentes sectores sociales y políticos del país, la marcha fue efectivamente una muestra de civismo y decisión de miles de ciudadanos. Sin embargo, los actores políticos, particularmente la sociedad civil que convocó a la marcha debe analizar este acontecimiento sin autoengaños, pues la larga marcha —si cabe la expresión—, continuará siendo dura y peligrosa.



La trascendencia de la marcha

Al final del año y doce meses después de las cuestionadas elecciones municipales del 2008, el país se encuentra en medio de un mar lleno de escollos: un fraude electoral no reconocido ni resuelto por el gobierno, una ciudadanía sometida a la represión de las fuerzas de choque del gobierno, anulación total de las instituciones estatales, una policía débil frente a la violencia política, fuertes recortes en el flujo de la cooperación internacional, crisis económica y una reelección presidencial impuesta de forma amañada.

Este es el contexto en que las fuerzas opuestas al gobierno de Daniel Ortega anunciaron la decisión de manifestarse el 21 de noviembre y convocaron a la ciudadanía a acompañarlas.

Las apreciaciones previas se dividían en

tres posiciones: los que intentaban desdramatizar la convocatoria argumentando que se trataba de una marcha más porque, a fin de cuentas, ese es un hecho normal de las democracias. Los oficialistas, para quienes la marcha se presentaba como una batalla política que tenía que ganarse a toda costa para neutralizar a la oposición y desmontar las supuestas conspiraciones antigubernamentales. Mientras que para la oposición en sus diversas expresiones, se trataba de una oportunidad para manifestar su descontento por el rumbo del país, la continuidad del proyecto Ortega y sobre todo, la posibilidad de recuperar el derecho para manifestarse públicamente.

Más allá de la medición de fuerzas que pueden representar las manifestaciones públicas por la cantidad de asistentes, en este caso se deben considerar un conjunto de elementos que, en perspectiva, conforman el trasfondo de la situación y le dan la trascendencia a la marcha del 21 de noviembre.

Desde el fraude electoral en noviembre del 2008, el gobierno había acelerado el paso de su carrera hacia el continuismo sin escatimar presiones y costos. Ha defendido el fraude aunque ello significara des-

legitimar completamente al CSE, cerrar la llave del apoyo presupuestario que la cooperación le ofrece al gobierno, deslegitimar también a la CSJ con la resolución que favorece la reelección presidencial y

coyuntura en una trinchera a ganar por asalto.

Frente a esta dinámica gubernamental, el llamado de la oposición a manifestarse era mucho más que una simple presencia física en la calle o una competencia de números. Se trataba de reaccionar, salir del acorralamiento, recuperar el espacio político y los derechos ciudadanos.

El reposicionamiento de los diferentes actores es el segundo elemento importante en el análisis. Del lado el gobierno y aún a disgusto, el presidente tuvo que echar mano a un nuevo y poco creíble discurso pacifista para ponerle un guante de seda al puño de hierro y esconder a sus agitadores más notorios.

En el lado opuesto, un frente único cívico colocó en segundo plano a los pactistas, las dirigencias políticas más comprometidas con el descalabro institucional, los jerarcas religiosos y empresarios acomodados con sus prebendas.

A primera vista el hecho de que la oposición lograra reaccionar y que el gobierno se haya visto impedido de anularla, es el resultado más vistoso y trascendente. Por debajo, el reposicionamiento de los actores, desafía a los partidos y a los liderazgos pactistas en el futuro inmediato.



que desnudó hasta el hueso cualquier apariencia democrática. A esa lista se agregan: el dilema en el que ha colocado a la policía con el secuestro de los espacios públicos y el escalamiento de la violencia política con la acción de sus fuerzas para-estatales, convirtiendo cada



Un derecho recuperado

Para nadie es un secreto que luego de un año en el cual todas las tentativas de manifestarse políticamente fueron neutralizadas con la violencia para-estatal, la posibilidad de que esta vez ocurriera lo mismo, era real. Sobre todo por los anuncios anticipados de Gustavo Porras, quien declaraba que las calles eran de su propiedad. El anuncio oficialista de no permitirle oponiendo una movilización con sus partidarios a la misma hora y en el mismo lugar incrementó sustantivamente los niveles de tensión, pero al final ambas movilizaciones se realizaron con incidentes aislados de violencia y los augurios catastróficos no se verificaron.

El hecho de que la marcha opositora tuviera lugar ya fue un indicador de éxito, sin embargo, la masividad de los asistentes le dio fuerza y representó el primer revés a la lógica de enfrentamiento seguida por el gobierno. No se puede decir que el gobierno intentara modificar su línea, al contrario, hizo todo lo posible para intimidar y amenazar, de tal manera que la posibilidad de un enfrentamiento a gran escala era real. El cambio de actitud estuvo influido por cuatro actores: la jerarquía de la iglesia católica, un sector del empresariado, la policía y los propios ciudadanos.

La tentativa oficial efectivamente se erosionó cuando estos actores de significativo peso social y político reaccionaron frente a la campaña de intimidación. Indudablemente que el disuasivo más poderoso fue la firme decisión de los ciudadanos de salir a la calle aún bajo amenaza. El resultado fue que el espacio y la posibilidad efectiva de la marcha opositora se hicieron reales, mientras que la convocatoria oficial se limitara a una presencia política más pasiva y concentrada.

Además de las lecturas políticas, el hecho de que se pudiera realizar la marcha también da lugar a ciertos mensajes simbólicos. En primer lugar, se desmoronó el tabú de que las calles son propiedad exclusiva de los partidarios del gobierno. Esto es especialmente cierto en el caso de las rotondas de la capital, sitios que últimamente se habían convertido en “objetivos simbólicos” del poder del gobierno y sus seguidores sobre el resto de la ciudadanía. Se recuperó además, el derecho ciudadano al disenso y la manifestación cívica y pacífica. Derecho que había sido arrebatado violentamente por los grupos de choque del gobierno desde su llegada al poder.

Otro actor que también resultó ganancioso con este acontecimiento fue la Policía Nacional. Los conflictos y la violencia política de los últimos tres años habían colocado nuevamente a la institución en una situación que ya había sido superada a inicios de la transición: plegarse a la voluntad partidaria o salvaguardarla como una institución al servicio de la nación.

Es evidente que la actitud firme de la jefatura policial en esta última marcha sirvió como un disuasivo importante para evitar la violencia política de los partidarios del gobierno, demostró que efectivamente hay capacidad policial para frenar este tipo de comportamientos cuando se tiene la voluntad de hacerlo y puso en claro de dónde viene realmente esa violencia política.

Sin embargo, tanto el derecho a marchar cívica y pacíficamente por las calles como la actuación de la policía es algo que todavía está por verse para confirmar plenamente la idea de que se ha producido un cambio en la situación. La policía tiene que probar de aquí en adelante que todo lo que se ha invertido en su proceso de profesionalización ha servido efectivamen-

te para construir una institución al servicio de la nación.

La variable de los conflictos y la violencia política, ausente en el país desde hace algunos años, ha reaparecido con fuerza en este nuevo contexto y sería ingenuo suponer que va a desaparecer después de la marcha. Sin embargo, nuevamente ha quedado deslegitimada frente a la ciudadanía y el resto del mundo, igual que sus protagonistas: los discursos presidenciales y los grupos de choque del gobierno. Falta saber si el presidente Ortega va a mantener la estrategia de la intimidación y el terror como pilar de contención del creciente descontento ciudadano.

¿Hay un nuevo escenario?

De cara al futuro, es legítimo preguntarse si la coyuntura generó un nuevo escenario, pero para encontrar las respuestas es necesario despojarse de los triunfalismos.

En lo fundamental el escenario del país no ofrece un cambio determinante en el futuro inmediato. El gobierno sigue atrincherado en su proyecto político continuista y el estado general del país no cambiará de un día para otro. Lo que cambió en la coyuntura es que las fuerzas de la oposición aflojaron el estrangulamiento al que estaban sometidas.

Por primera vez en mucho tiempo se estableció un acuerdo de nuevo tipo entre la sociedad civil organizada y los partidos políticos. Pero hay varios puntos a tomar en cuenta: en primer lugar, tanto las organizaciones de sociedad civil como los partidos no pueden atribuirse la masividad de la participación ciudadana a su exclusiva convocatoria. Ninguno de ellos goza de legitimidad y confianza suficiente de la población como para creer que son una fuerza política organizada. Esto es mayormente cierto en el caso de los partidos políticos y sus líderes, quienes han



venido perdiendo la credibilidad de los ciudadanos aceleradamente por su incapacidad de distanciarse del pacto Alemán-Ortega, unos; la debilidad de las propuestas y los liderazgos políticos, otros.

La posibilidad de constituir un frente amplio opositor, la posibilidad de la renovación política y programática de los partidos, y la posibilidad de lograr una mayoría política operativa en la Asamblea Nacional, en la calle y en la opinión pública, están todavía pendientes de verificación y en eso no hay que llamarse a engaños.

El orteguismo es un bloque minoritario pero consistente, con capacidad de presión y cooptación. La oposición está fragmentada y aún tiene partes comprometidas con el juego político del pacto, mezquinos intereses particulares, carece de un programa común y un liderazgo con la fuerza suficiente para cohesionar las fuerzas. Mucho trabajo queda por hacer para perfilar un nuevo escenario. Para eso es necesario un cambio en los liderazgos y un programa que permita identificar objetivos en el tiempo disponible al horizonte del 2011.

Hasta ahora el país ha transitado por un puente que lo ha llevado a un escenario de descomposición y ese puente ha estado montado sobre un triángulo de intereses entre el gobierno, las cúpulas políticas y los grupos cooptados. La ciudadanía se quedó sin posibilidad de ejercer control y sanción, se quedó sin instituciones que aseguraran la transparencia, la separación de poderes y el estado de derecho. Ahora

debe lidiar con una estructura de poder conformada en paralelo al Estado formal, penetrándolo, subordinándolo y colocando fuera de toda ética y control democrático.

Un nuevo escenario que enrumbé otra vez al país por la senda de la democracia no es posible si no se rompe esa triangulación y no se establecen nuevos consensos, transparentes y honestos entre las diferentes fuerzas políticas.



Las evidencias muestran claramente que el oficialismo no puede ni quiere ceder. Su patética autoafirmación y falta de programa se alimentan y sostienen con los recursos que controla. Probablemente eso no ampliará su base ni sus alianzas, por ello mismo intentará impedir cualquier iniciativa de oposición con todos los recursos a su alcance.

Por su parte, el balbuceo político de los liberales entrampados entre Alemán, como un lastre incómodo, y una ruptura con el pacto, una sociedad civil gradualmente crecida y más consistente, y un sandinismo crítico que no representa todavía una fuerza alternativa, muestran que hace falta camino por recorrer y que el trecho restante será arduo.

Clarificar posiciones

La coyuntura creada alrededor de la marcha el 21 de noviembre, no ha cambiado el escenario pero abre el camino para una necesaria clarificación de posiciones entre todos los actores.

En las esferas gubernamentales un análisis de costo-beneficio podría significar replantear el rumbo de sus estrategias. Mientras que por el lado de la oposición, el planteamiento de la renovación política y programática no es independiente de quienes la impulsen y lideren.

Entre los liberales existe la tentación de capitalizar el descontento y realizar una unificación espuria sin sanear la casa. Las organizaciones de sociedad civil y las corrientes del sandinismo crítico aún padecen de fragmentación y en algunos casos, se auto complacen en ello. El argumento del partido único está agotado y no tiene futuro pues solamente representa la sustitución de zancudos viejos por nuevos. Igual ocurre en el caso de un supuesto diálogo nacional pues solamente representa una artimaña para entretener a los actores sociales y políticos del país mientras los pactistas rehacen su acuerdo.

Tal como se estableció en el discurso de cierre de la marcha opositora, los pilares fundamentales para establecer un nuevo tipo de liderazgo, de coalición y de programa, son: la negativa a los pactos secretos, la modernización y saneamiento de los partidos políticos y la presión de la sociedad. La tarea del 2010 está prácticamente definida.